

La salida de la crisis argentina de 2001. Economía y políticas en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Ariel Emilio Fidanza.

Cita:

Ariel Emilio Fidanza (2015). *La salida de la crisis argentina de 2001. Economía y políticas en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-061/518>

La salida de la crisis de 2001: economía y política en el gobierno de Eduardo Duhalde

Ariel Fidanza. Lic. Sociología (UBA), Maestría en Ciencias Sociales en curso (UNGS-IDES)
ariel.fida@gmail.com

Resumen

Como adelanto de la tesis de maestría que aún se encuentra en elaboración, presentamos aquí algunos puntos de debate sobre los aspectos económicos y políticos de la salida de la “crisis de 2001”. Retomando algunos aportes de la bibliografía local, pretendemos dar cuenta de qué significó y cómo fue llevada a cabo la “salida” de la crisis. Entendemos que se trató sobre todo de una crisis de acumulación de capital, que adquirió la forma de las conocidas crisis fiscal, financiera, de recesión, y de una grave crisis política, que terminó con el gobierno constitucional de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Nuestro objetivo se centra en analizar el gobierno de Eduardo Duhalde (enero de 2002 a mayo de 2003), período que abarca las bases económicas y políticas de una primera y fundamental salida de la crisis, que será completada, en un sentido de continuidad económicas pero de ruptura político-ideológica, por el siguiente gobierno de Néstor Kirchner.

Palabras clave: crisis, acumulación, hegemonía, economía, política.

Una primera aproximación

En un trabajo de Martín Schorr y Ana Castellani se plantean cuatro interpretaciones sobre la crisis de la Convertibilidad. Una propia del “neoliberalismo”, que plantea las insuficiencias en mantener dicho esquema, básicamente, insuficientes reformas estructurales y excesivos gastos públicos. Una segunda visión, propia de la Unión Industrial Argentina, plantea la rigidez del modelo que atentaba contra los intereses de los sectores productivos. Una tercera encuentra que fueron las luchas populares contra los aspectos regresivos del modelo los que dieron fin con el “Argentinazo”, que ejemplifican con trabajos de Alberto Bonnet. Y una cuarta interpretación, que los autores asumen como propia, junto a investigadores de FLACSO como Eduardo Basualdo, que “vincula la crisis del modelo neoliberal con un proceso de fractura dentro de la gran burguesía argentina” (Castellani y Schorr s/f: 2).

Nosotros agregamos una más, que plantea una continuidad profunda de la especificidad del modo de acumulación en nuestro país, sobre el cual se suceden períodos en los cuales cambian las formas de su desarrollo. Y sostenemos que no todas las interpretaciones son excluyentes entre sí, pero comencemos retomando la lectura estructural del país.

Limitaciones estructurales

Los capitales industriales concentrados (casi en su totalidad extranjeros) que producen en el ámbito local lo hacen con una productividad muy baja comparada a los estándares mundiales. Y además solo parcialmente logran exportar, con lo cual mayormente se reducen al mercado interno, reducido. Sin embargo, existieron históricamente una serie de compensaciones por la baja productividad y bajo mercado interno: un salario real por debajo de su valor, que se torna crónico desde mediados de los 70; la reutilización de tecnologías ya obsoletas para el mercado mundial; la elusión y evasión impositiva; la absorción de ganancia de los pequeños capitales; y la más importante, la apropiación de una porción de plusvalía bajo la forma de renta agraria, en particular la que proviene desde el exterior por exportaciones (Iñigo Carrera 2011).

A su vez, las formas de dicha apropiación son múltiples. Se destacan las retenciones a las exportaciones, las restricciones a las mismas, y la sobrevaluación de la moneda, que resulta menos visible, por no operar tan directamente (Iñigo Carrera 2011). La sobrevaluación también baja el precio de las mercancías agrarias en el mercado interno. Pero la diferencia del valor real creado por la exportación, el Estado debe usarlo para sostener el tipo de cambio.

En la ISI, el Estado ponía recursos de la renta de la tierra, por medio de retenciones y del monopolio comercial estatal, en la industria, por medio de subsidios, reducciones de tarifas a servicios públicos, y otras cuestiones (promociones industriales, etc.). De esta manera, el modelo funcionaba, pero con una economía cerrada, y dependiendo del sector agrario. Cuando este fallaba, se producían las recesiones de los ciclos stop and go. (Iñigo Carrera 2011).

Hacia mediados de la década de 1970, los mecanismos se centran en la baja del salario real y el endeudamiento externo. La fase que culmina en 2001 se correspondía con una relativa contracción de la renta de la tierra, una renovación cualitativa de la reproducción industrial, con las privatizaciones, la consolidación de la caída del salario real mediante la expansión de la población obrera sobrante, la liquidación masiva de pequeños capitales nacionales y la relativa actualización técnica de los capitales más concentrados (Iñigo Carrera 2011).

Durante la Convertibilidad, La forma de sostener la sobrevaluación del peso fueron las privatizaciones y el endeudamiento. La crisis inminente frente a la falta de ampliación de la deuda pública ya no necesitaba de una dictadura militar debido a la fragilidad de las clases obrera y pequeña burguesía. El peronismo había llevado adelante las políticas en los 90, y podía hacer lo propio con la crisis. En 2002, hubo “se convocaron tres huelgas generales, una por la CGT (Moyano) y dos por la CTA; ninguna por la CGT (Daer) que había participado en tres de las seis de 2001” (Iñigo Carrera 2011: 55). La recuperación se convierte en un auge de crecimiento con la suba de las materias primas a nivel mundial.

La devaluación fue la medida clave en la salida de la crisis, junto con el *default*. Implicó una redistribución de pérdidas y un nuevo comienzo de ciclo. Permitió bajar el costo de las

empresas y del Estado. La contracara, desde luego, fue la desvalorización de los ingresos de los trabajadores por la inflación¹. Como señala Graña, “esa protección del mercado interno que el consenso entre economistas otorga al TCR [tipo de cambio real] alto es justamente producto de la caída del poder adquisitivo de los salarios y no es un instrumento mágico que crea riqueza, sino uno que la redistribuye” (Graña 2013: 79). Además de perjudicar a los ahorristas en dólares que en general vieron pesificados sus depósitos a 1,40 cuando el dólar rondaba entre los 3 y 4 pesos. Claro que se sumaron otras medidas puntuales para contener la inflación, o al menos evitar la hiperinflación, como el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.

La articulación política

El propio Duhalde da una pista sugestiva sobre su presidencia de transición.

“Nosotros resolvimos enfrentar las cosas a partir de la decisión de fondo, que era cambiar de raíz el modelo. Frente a esa decisión madre debíamos elegir y ejecutar –con la mayor responsabilidad que nos fuera posible– las medidas imprescindibles para enfrentar el derrumbe, aun a sabiendas de que nuestras decisiones no serían bien miradas en las encuestas. Nos habían pedido que asumiéramos los destinos del país para hacer el «trabajo sucio». Si hubiera sido posible en aquellas circunstancias tomar medidas del agrado de todos, entre aplausos, en vez de estar rodeado de cacerolas e insultos, no me hubieran convocado a mí” (Duhalde 2007: 268).

Entre líneas, se refiere a Saá y su anuncio de default entre aplausos y el vitoreo de legisladores peronistas. El “trabajo sucio” al que se refiere Duhalde es sin dudas la devaluación, con el costo social que ello implicaba (nosotros entendemos que la otra parte de ese “trabajo sucio” terminó siendo de hecho además la represión de la protesta social). Más allá de los apoyos políticos (ver *supra*), su sustento real era el del denominado Grupo Productivo, es decir, el empresariado concentrado que buscaba la devaluación. Duhalde era el representante político de ese grupo liderado por los grandes sectores empresarios que bregaban por una devaluación que los beneficiaría en términos directos e indirectos. El propio Duhalde lo deja bastante claro cuando afirma que:

“La experiencia del Movimiento Productivo tuvo una enorme importancia durante mi presidencia. Sabía que estaba acompañado en mis ideas centrales por un sector importante de la sociedad y estaba decidido a que no iba a calentar el sillón. Yo no me dispuse a administrar una crisis. Yo me planteaba un cambio de modelo en la Argentina” (Duhalde 2007: 218).

Veamos entonces más de cerca a este agrupamiento.

¹ “El déficit crónico y el estrangulamiento de las cuentas fiscales que bajo la convertibilidad no encontraba resolución, se resolvió de golpe, mediante la combinación de la desvalorización de la moneda, la licuación de los salarios y asignaciones que paga el estado (comenzando por las jubilatorias) y la cesación de pagos de la deuda externa” (Grigera y Eskenazi 2013: 175).

Grupos empresarios que buscaban una alternativa armaron el Grupo Productivo en agosto de 1999, liderado por la UIA, e inicialmente compuesto por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Más adelante mostraron su apoyo la CGT, sectores de la Iglesia, y por último, hacia diciembre de 2001 se unirían los bancos nacionales de ABAPRA y rectores de universidades nacionales.

La UIA y el establishment productivo habían empezado a plantear que para salir de la recesión, iniciada en 1998, era necesaria la industrialización del país con eje en los mercados externos (Schorr y Wainer 2004). El GP mantuvo el diálogo tanto con el PJ como con la Alianza. De hecho, el ministro aliancista, José Luis Machinea, era un hombre ligado a la UIA, pero mantuvo a rajatabla la Convertibilidad. Hacia fines del año 2000, Duhalde inaugura el Movimiento Productivo Argentino, en alianza con el GP. Esta alianza se vio confirmada al nombrar a de Mendiguren al frente del flamante Ministerio de Industria, que creara Duhalde al asumir la presidencia. Frente a las propuestas dolarizadoras, este grupo logró un acercamiento a la CGT, con la cual sacaron un documento conjunto el 9 de diciembre. El 21 de diciembre de 2001, tras la asunción de Rodríguez Saá, el Grupo Productivo presentó en una conferencia de prensa un documento para pesificar la economía, flotar el tipo de cambio y declarar la moratoria de la deuda por un año. “La propuesta de Duhalde reproducía, casi literalmente, la idea que pocos meses antes había promovido el GP” (Beltrán 2014: 335).

Para entonces la devaluación ya estaba decidida. El problema era cómo implementarla evitando la hiperinflación. En ese sentido creemos que si bien existía un grupo “dolarizador”, no expresaban una alternativa a la salida de la crisis en términos objetivos. Más que una alternativa de salida de la Convertibilidad la dolarización significaba una continuación e incluso una profundización de la misma (Eskenazi 2009). E incluso expresaban así sus propios intereses sectoriales, con peso para hacerse oír y plantear trabas, pero no de imponerse. La “dolarización” funcionaba así como una especie de “objetivo de máxima” con el cual presionaban por otros “objetivos de mínima” (como la compensación a los bancos).

La salida de la Convertibilidad, del “corralito” y del “corralón”

La salida de la convertibilidad se mezcló con la desarticulación del corralito que resultó sumamente compleja y atravesada por fuertes disputas entre los actores más poderosos y con la presión popular. El proceso se complejizó a partir de la “promesa política” del flamante presidente de mantener la moneda de origen lo cual era prácticamente imposible.

Cobe (2009) plantea distintas etapas de la “pesificación”. La “pesificación acotada”, “1 a 1” de los préstamos de hasta 100.000 dólares, sancionada el 6 de enero con la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561) y el anuncio de un cronograma de devolución de los depósitos en la moneda de origen (la “reprogramación de los depósitos” o “corralón”). Con esta ley, que delegaba facultades extraordinarias al Poder

Ejecutivo, también se pesificaron las tarifas de servicios públicos que manejaban empresas privatizadas hasta entonces con contratos dolarizados e indexados a la inflación norteamericana, que entonces pasaron a desdolarizarse y desindexarse. La ley incluía títulos del Estado nacional garantizados por la recaudación de las retenciones a la exportación de hidrocarburos (del 5%) como un criterio de compensación a las entidades financiera, y supeditaba la devolución de los depósitos bancarios al principio de solvencia del sistema financiero. La autora sintetiza que con esta “ley quedó establecido el criterio de estatizar las pérdidas del sector financiero” (Cobe 2009: 59).

La reprogramación de los depósitos implicaba diferir sus devoluciones manteniendo la moneda de origen pero en un largo plazo y en cuotas, lo que no contó con ninguna simpatía por parte de los ahorristas que querían su dinero de forma inmediata y que no confiaban en una eventual devolución a futuro. Tampoco convenció a los bancos, sobre todo a los privados, que veían pesificados los dólares que les debían pero manteniendo sus propias deudas en dólares. Entonces, ya en febrero, se pasa a la “pesificación ampliada” (Cobe 2009). Aquí resultó clave la presión de las grandes empresas y de la UIA en particular para pesificar todas las deudas, incluidas las superiores a los 100.000 dólares. El argumento era que de lo contrario quebrarían muchas empresas y la recuperación se haría imposible. El 15 de enero el gobierno obligó al Banco Central a que las deudas no pesificadas, es decir, las superiores a los 100.000 dólares se puedan saldar con el “dólar oficial” al cambio de 1,40.

Por esos días comienza a vislumbrarse que el gobierno impulsa la pesificación (voluntaria) de los depósitos. Especialmente desde la cartera económica se busca dar a entender la imposibilidad o inviabilidad del mantenimiento de la moneda de origen. Por otro lado, comienza a perfilarse un principio de acuerdo entre la banca de ABA (los privados) y el Grupo Productivo acerca de la pesificación (Cobe 2009: 71). Los bancos querían que se pesifiquen los depósitos y los industriales querían que se pesifiquen las deudas mayores a 100.000 dólares, lo cual perjudicaba a los bancos. Para entender porqué aceptaron esta medida, hay que contextualizar la judicialización del corralito que significaba un “drenaje” de fondos con recursos de amparos. Mientras tanto crecía el descrédito y las investigaciones a entidades bancarias sobre fuga con irregularidades. Y algunos banqueros comenzaron a ser investigados bajo la ley de Subversión Económica. (Cobe 2009: 74; Amadeo 2007). Los bancos preferían “negociar con el aparato estatal, en lugar de hacerlo con un sinnúmero de personas, familias y empresas, cuya capacidad de pago (en referencia a los deudores) era más imprevisible e incierta que la de un Estado que había caído en default” (Cobe 2009: 76).

La tercera y última etapa, la “pesificación universal”, que según la propuesta económica que anuncia el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov el 3 de febrero, consistía en la pesificación asimétrica y en la liberación del dólar. De Mendiguren planteó que la pesificación no era meramente una política monetaria, sino el pilar económico de la

recuperación (Cobe 78-9). Duhalde, sin embargo, admite que “la pesificación asimétrica fue, en efecto, una decisión contingente” (Duhalde 2007: 326).

Los apoyos políticos y la oposición

El sostén del gobierno consistió en un acuerdo político que Cavarozzi nomina “una mesa de tres patas” compuesta por “la liga de gobernadores” peronistas, el Congreso Nacional y un acuerdo con el alfonsinismo de la UCR (Cavarozzi 2006). A ella podemos agregar la Mesa de Diálogo Argentino, donde la Iglesia Católica jugó el rol principal junto con directivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero más que una “cuarta pata”, se trató de un “mantel”. Es decir, no significaba un sostén político, sino apenas un apoyo simbólico; de un ámbito de discusión institucional cuyo único función concreta fue acordar algunas condiciones del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD).

El hecho de que Duhalde haya logrado articular un apoyo político a su gestión, aunque ciertamente tambaleante, no debe ocultar que su presidencia fue básicamente impopular. En síntesis, si bien articuló consenso “por arriba”, no alcanzó apoyos significativos “por abajo”, más bien todo lo contrario. En términos generales operó una fuerte impugnación a lo que entonces se llamaba “la clase política”. Surgieron entonces unos liderazgos personalistas desprendidos de partidos y fuertemente mediáticos. El movimiento piquetero, sin embargo, sí fue un actor de peso que presionó sobre el gobierno, por lo que le dedicaremos el próximo apartado. Pero lo cierto es que ni “por arriba” ni “por abajo” logró articularse un frente de poder alternativo que lograra imponerse.

La Corte Suprema de Justicia complicó y alteró la estrategia del gobierno con respecto al corralito. Las primeras medidas de la Corte respetaron la ley de Emergencia Económica y el corralito, pero el 1 de febrero, tras un cacerolazo el 26 de enero contra la propia Corte, declararon la inconstitucionalidad del corralito en el “caso Smith”, un ahorrista argentino. La movida del gobierno fue entonces presionarlos con el juicio político, que sin embargo se empañó en el Congreso Nacional. Finalmente dieron marcha atrás y lograron cierto acuerdo tácito. La ofensiva de la Corte, sin embargo, sirvió para acercar posiciones entre el gobierno y los bancos, que veían en la Corte un actor sobre el cual no podía influir y que hacía peligrar sus posiciones económicas (Cobe 2009).

La “crisis de abril”

En marzo la situación general no sólo no mejoraba, sino que empeoraba casi todos los indicadores, y en abril la situación llegó a un máximo nivel de tensión. La inflación aumentaba (sobre todo en combustibles y alimentos) y consecuentemente las presiones de los sindicatos ante la caída del nivel de vida; el acuerdo con el FMI no avanzaba; los planes

sociales y las retenciones recién se anuncian a comienzos de abril, y éstas últimas fueron muy resistida por el sector agropecuario; no se resolvía el corralito y órdenes judiciales comenzaban a obligar a los bancos a devolver depósitos, forzando al Banco Central a sostenerlos para evitar quiebras generando un “goteo” en las reservas; la industria sí tenía incentivos pero todavía era muy pronto para que mostrara resultados.

El martes 23 de abril, ya con feriado bancario, el Congreso rechaza el plan económico, con lo cual al día siguiente renuncian los tres ministros de Economía, Industria y Jefatura de Gabinete. Cuando las especulaciones no descartan la caída del gobierno, el jueves 25 el presidente junto con los gobernadores firman un acuerdo de 14 puntos, en el cual asumen el plan económico que había sido rechazado hasta entonces. El viernes el Congreso aprueba la ley “antigoteo” o “tapón”, poniendo un freno al problema macroeconómico más urgente. El acuerdo era notoriamente ortodoxo. El primer punto resumía todos los demás: “Se cumplirá con los compromisos con los organismos internacionales”, con lo que se trataba de cumplir las metas que le imponía el FMI. Fue entonces que casi toda la dirigencia política aceptó el rumbo económico, y todo avanzó, con dificultades, pero ya sin tantas incertidumbres desde el arco político.

El movimiento piquetero: sobre “palos y planes”

La “Masacre de Avellaneda”

Si por un lado la salida de la crisis de abril le dio el apoyo político que Duhalde necesitaba para superar ese momento, por otro lado, la reacción popular y de los movimientos sociales de desocupados en particular se acrecentó. Hacia la primera semana de junio, el clima era de la mayor tensión. Pareció entonces que el gobierno decidió endurecer su postura frente al movimiento piquetero. Para el 26 se llamó a una movilización masiva y nacional, con una agenda de reclamos amplia², y por la cual se montó un operativo con la policía bonaerense, la policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Además de los usuales bastones, escudos y pistolas lanza-gases, usaron pistolas y escopetas con balas de plomo. El saldo de la jornada fue de casi 200 heridos, 33 con heridas de bala de plomo, 170 detenidos y dos muertos, los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de zona sur, Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 21.³

² Regularización de planes sociales para desocupados, implementación de tarifas populares en los servicios, planes para la construcción de viviendas, entrega de alimentos a comedores desocupados, libertad de diversos militantes sociales y políticos detenidos, y manifestación en contra de la política económica emprendida por el Gobierno (Artese 2013). Participaron del corte del 26 de junio el Movimiento Teresa Rodríguez, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Territorial de Liberación, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Trabajadores Combativos. No participaron, en desacuerdo con la medida, la Federación de Tierra y Vivienda, de Luis D’ Elía y la Corriente Clasista y Combativa, que mantenían diálogo con el gobierno de Eduardo Duhalde.

³ Una vez ocurridos los hechos, desde el gobierno hablaron de una excepcional violencia por parte de grupos de manifestantes, responsabilizando a grupos piqueteros de los incidentes. Luego de conocidos los hechos, el propio

El 26 de junio como bisagra

La feroz represión, y particularmente el asesinato de dos jóvenes militantes, marcó un punto de inflexión sin duda en el gobierno y en el movimiento piquetero, y para Pérez Álvarez (2010) incluso en la historia del país y de la organización de las clases obreras, marcando el inicio de un descenso de las movilizaciones a nivel nacional y la incidencia política de los movimientos. Con las masivas reacciones de condena a la masacre de Avellaneda quedaba descartada la continuidad represiva y se aceleraron los planes sociales, que luego de junio comienzan suman sus efectos de activación económica junto a una recuperación general. De esta manera, tras los hechos el movimiento piquetero no se expandió tanto como se institucionalizó, y ciertamente tampoco se unificó.

Los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados

La aplicación masiva de los planes sociales resultó clave para sobrellevar la situación social y la política. Fue un alivio concreto para sus asignatarios y descomprimió la tensión política. Sin embargo, si bien la idea existía desde un principio en el gobierno, el anuncio recién se hizo a comienzo de abril, junto con las retenciones (particularmente a exportaciones de materias primas agrarias). Esa simultaneidad fue intencional, y de hecho Duhalde presentó la última como medio de sostener a la primera.

Con los PJJHD instrumentados por Duhalde, los municipios vuelven a estar en el centro de la política asistencial, dado que los planes se implementan a través de ellos (Delamata 2004). De los dos millones de planes que alcanzó el gobierno de Duhalde el 90% fue administrado por los municipios, y sólo el 10% restante por las organizaciones de desocupados. Si bien no amenazan de manera significativa a las organizaciones existentes, los planes sí inhiben el surgimiento nuevos agrupamientos en barrios o pueblos donde todavía no existían. Allí “a través de Plan, las estructuras estatales y políticas tradicionales vuelven a marcar presencia y se recuperan como punto de referencia como acceso a los recursos y la ayuda para las poblaciones pobres” (Gómez 2007: 129).

La transición negociada: el acuerdo con Kirchner

El acuerdo fue sinuoso y nada fácil dado el fuerte perfil opositor del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, pero en verdad fue ese mismo perfil el que le permitió también

Duhalde habló de una “cacería atroz” por parte de las fuerzas de seguridad. En enero de 2006, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua por los asesinatos de los militantes. Y otros policías condenados por encubrimiento. No hubo culpables políticos.

sumar votos. El 24 de marzo de 2002 Kirchner afirmaba en una entrevista que la gestión del presidente "más que una alianza con la gente es una alianza entre las corporaciones". Se vislumbra así la importancia que Kirchner daría a alcanzar un apoyo "por abajo", y no sólo "por arriba", para usar nuestros términos. Es decir, sostenerse en el poder menos con apoyos "corporativos" que con la "imagen pública", aunque contando con lo hecho por su antecesor.

Kirchner no firmó el documento de los 14 puntos con los cuales se descomprimió la crisis de abril y tampoco el documento de Santa Rosa, del 27 de mayo, que reafirmaba el apoyo al gobierno nacional en los mismos términos. El 3 de junio, Kirchner se negó a firmar el acuerdo para reducir el déficit en su provincia e insistía en su postura de adelantar la fecha de las elecciones, además de realizar pronunciamientos muy críticos para con el gobierno: "Hay un marco de debilidad muy grande, esto impide la resolución de la crisis como corresponde" (LN 3/06/02).

A una semana de los asesinatos de Kosteki y Santillán, Duhalde anunció el adelantamiento de las elecciones para fines de marzo y de la asunción para el 25 de mayo. La renuncia del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, a aceptar la candidatura presidencial, primero, y luego la baja medición en las encuestas del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, empujaron a Duhalde hacia Kirchner, en un acuerdo que se formalizó recién el 7 de enero de 2003.

Recomposición

En los primeros seis meses, los más conflictivos y decisivos para el gobierno de Duhalde, se sentaron las bases de la salida de la crisis. La "masacre de Avellaneda" tuvo un efecto paradójico. Si bien por un lado significó un duro golpe al gobierno, reforzando un rechazo de sectores populares y progresistas del que Duhalde jamás se recuperó, por otro, no significó un recrudecimiento de la protesta social, sino incluso una modesta disminución. Los planes estaban comenzando a masificarse (para julio y agosto ya había 2 millones) y la recuperación económica se empezaba a sentir, aunque muy tibiamente. Sobre todo, al adelantar las elecciones, disminuyeron las expectativas y la figura de Duhalde dejó paso a las especulaciones sobre su sucesor.

La gestión de Roberto Lavagna no tuvo altisonancias, pero fue ganando aceptación en el público general, y sobre todo en el empresario y el político. Hacia fines del año, ya se habla del "veranito" económico del gobierno, y en enero de 2003 firman finalmente un acuerdo con el FMI. Aunque de corto plazo, habilitaba desembolsos del BM y del BID, brindando al gobierno de Kirchner "aire" y espacio de maniobra para acordar un arreglo de mediano plazo.

Con respecto al movimiento piquetero, a partir de febrero de 2003, en plena campaña electoral, se percibe que la aceptación social de los cortes de ruta se reduce (Gómez 2007). El

presidente Kirchner continuaría luego con la “estrategia de «institucionalización» de los movimientos” e incluso avanzaría en “la «integración política» de parte importante de los movimientos como apoyos políticos” a su gobierno (Gómez 2007: 130).

Tres claves como balance

En su discurso de asunción del 2 de enero, Duhalde se centró en tres claves como objetivos de su gobierno, que nos servirán para evaluar su gestión en sus propios términos: “Esta gestión que hoy mismo comienza su tarea se propone lograr pocos objetivos básicos: primero, reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina; segundo, garantizar la paz en Argentina; tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”.

Logró contener la protesta social que adquiriría distintas formas, si bien ninguna organizada para socavar de manera violenta el *statu quo*, sí se daban múltiples saqueos y atentados a la propiedad, además de las masivas movilizaciones con cortes de calles, rutas y accesos interurbanos. En este campo, logró mantener una situación tensa pero sin desbordes importantes hasta el 26 de junio.

El “cambio de modelo” se efectivizó, si se entiende por ello la devaluación y una nueva senda de crecimiento económico, dinamizado principalmente por la exportación y por los bajos salarios, y por otro lado en la negociación con el FMI que dilató los compromisos de pagos de la deuda, y el endeudamiento interno del Estado principalmente con las compensaciones a los bancos, en lo que significó también un subsidio cruzado a un grupo de grandes empresas.

Con respecto al primer punto, existen más ambigüedades. De manera inmediata, se trataba de obtener la mínima legitimidad como para durar en el cargo y poder gobernar. Esto lo logró, aunque con dificultades y de manera parcial, pues no llegó a completar su mandato. Pero sí logró cumplimentar los grandes objetivos, con lo cual su salida anticipada no truncó su gobierno. Es más, el propio Duhalde negoció los términos de su retiro y logró un sucesor aliado. En segundo lugar, se trataba de obtener una legitimidad en términos de consenso y aceptación. Esto también fue parcial. Lo logró en términos de alianzas, y de manera difícil, pero no alcanzó la aceptación popular masiva (aunque al término de su gobierno repuntó en la valoración de su gestión). Por último, sí logró mantener la institucionalidad y reencauzar cierta normalidad política. En síntesis, creemos que sí logró recuperar la legitimidad institucional, pero no la política (tarea que completaría el gobierno de Néstor Kirchner).

Conclusiones: la salida de la crisis en debate

La propia agudización de la crisis empuja a su resolución. Las resistencias populares al ajuste no hacen sino agudizar la crisis hasta que el ajuste se impone de manera más violenta. Es lo que pasó con el Rodrigazo y la dictadura, o con el Plan Austral y la hiperinflación, y con el ajuste de López Murphy y la devaluación. Lo mismo ocurre con las resistencias gubernamentales al costo político del ajuste y a su relativa imprevisibilidad. Acordamos con que “la devaluación sólo pudo ser instrumentada luego de que la crisis alcanzó niveles que hicieron insostenible la convertibilidad” (Beltrán 2014: 336) y cuando además la dolarización era técnicamente inviable, por el insuficiente nivel de reservas. Pero no acordamos con lo siguiente:

“ante la profundidad de la crisis económica, las lógicas sectoriales se orientan a obtener beneficios o, en el peor de los casos, reducir los costos para cada sector. Esa disputa tiene como eje al Estado: como en el pasado, se intenta trasladar (en general con éxito) los costos de la crisis al Estado. La manera en que se van resolviendo esas tensiones y la forma en que se producen los reajustes dan cuenta no sólo de un cambio en la distribución relativa del poder estructural de los sectores empresarios, sino también de la debilidad de las capacidades estatales para intervenir en la resolución de los conflictos. Como resultado de esa incapacidad, es el Estado –y no los capitalistas– quien acaba asumiendo los mayores costos de la crisis” (Beltrán 2014: 339).

Lo que Beltrán señala como resultado de una debilidad estatal, nosotros lo interpretamos como la exacta función del Estado en tales circunstancias. Al menos, una de sus funciones. Efectivamente, el Estado media en los reajustes, y no es su debilidad lo que explica tales resultados, sino su forma específica para expresar políticamente las fuerzas de las clases sociales y de las facciones de clase. Además, Beltrán no menciona en el pasaje a los trabajadores como contrapartida de “los capitalistas”. El Estado no es un sector de la población, sino la institución social que media entre las relaciones de clase, para reproducir esa división de clases.

Acordamos con la lectura de Bonnet (2002) del agotamiento del aumento de productividad, financiamiento externo y baja del salario hacia el fin de la Convertibilidad. Pero Bonnet (2002) señala el peso de la lucha de clases bajo la forma de la presión popular de los desocupados y demás movimientos, para resistir esos ajustes, cuando lo cierto es que aun reconociendo el papel en la resistencia popular para echar al “ajustador” gobierno de la Alianza, lo que vino inmediatamente después fue un drástico ajuste del gobierno de Duhalde con la devaluación. Es decir que la forma concreta de lucha de clases, particularmente de resistencia a los ajustes, mostró su fuerza en el 2001, pero mostró su impotencia frente al cambio de forma de lucha de clases, con el nuevo gobierno y esquema de ajuste. Si bien agudizó al movimiento piquetero, no mostró resultados concretos.

Tampoco acordamos con la siguiente lectura particular:

“[F]ue la fuerza de la movilización popular la que impuso, por la dinámica que adquirió el conflicto, una salida de tipo cesarista, que recuperó la autonomía para el Estado con respecto a los intereses directos de las fracciones de clase dominantes que sostuvieron la etapa menemista. Fueron las clases subalternas las que obturaron una salida de continuidad subordinada del Estado a la lógica de acumulación capitalista de cuño neoliberal y determinaron el rumbo general de una recomposición que tuvo que tenerlas en cuenta para recuperar legitimidad” (Thwaites Rey 2011: 46).

La “autonomía relativa” recuperada por el Estado no es a pesar de los intereses de la burguesía, sino la forma de acumulación que adquirió el país con los cambios mundiales y el contexto local. Ciertamente, el kirchnerismo supo capitalizar cierto descontento popular para legitimar y profundizar algunos aspectos de tal “autonomía estatal”, pero no fueron su causa. Pero tampoco creemos que el populismo izquierdista de Néstor Kirchner sea una retórica vacía que esconde un contenido continuista neoliberal, sino más bien que expresa la forma política de una nueva apropiación por el estado de un creciente flujo de renta de la tierra, y su distribución al capital industrial (Gringber y Starosta 2014).

Pero ya en 2002 está presente, aunque sea de manera todavía vaga, el perfil “nacional-popular” que el gobierno de Kirchner logra dar mayor sustento material y por lo tanto credibilidad simbólica. Coincidimos con Cantamutto y Wainer (2013) en que Kirchner consolida la salida de la crisis que efectúa ya el gobierno de Duhalde. Y subrayamos la importancia político-ideológica de la construcción hegemónica kirchnerista para dar sustento político al bloque económico en el poder. En sus términos: “para sostener el rumbo económico era necesario culminar la tarea que Duhalde había dejado pendiente: la validación política” (Cantamutto y Wainer 2013: 109). Por otro lado, no coincidimos con la interpretación que efectúan sobre una salida política más que económica, que implica un acercamiento conceptual interesante, pero ambiguo.

“la forma concreta en que se desarrolló la crisis tuvo que ver con los cambios en los posicionamientos y las alianzas que establecieron los distintos actores ante este panorama. En este sentido, el tipo de salida a la crisis no estaba determinada por sus condicionantes estrictamente económicos sino que dependió de las relaciones de fuerza entre las distintas clases y fracciones de clase y en su capacidad para transformarse en fuerzas sociales. En definitiva, la salida a la crisis no fue tanto económica como política” (Cantamutto y Wainer 2013: 134).

“si los límites en los que se enmarca la lucha de clases están dados por las condiciones objetivas que impone la estructura, el resultado concreto de la misma solo puede ser explicado a través de las formas ideológicas y políticas que asume a partir de los sujetos que intervienen en ella, que son sujetos con historia e ideología” (Idem: 135).

Se trata del debate de contenido y forma. Pero el error está en confundirlos como condicionantes objetivos o económicos y disputas subjetivas o políticas. Contenido y forma no existen de manera separada. No se trata de que haya un “contenido económico” que se impone y que se expresará de múltiples “formas políticas”, pues además así queda indefinido

el alcance de una y otra cuestión. Esto no excluye que sí se dan determinantes específicos que dejan lugar a distintas opciones, pero los determinantes y las opciones pueden ser tanto políticas como económicas.

Cuando hablamos de contenido y forma nos referimos a un solo proceso en el cual las formas no existen como separado campo de fuerzas libres en disputa en su pura especificidad que moldean un contenido que viene determinado de otro lado, sino a un conjunto de relaciones sociales que en su compleja densidad de determinaciones históricas reproducen esquemas de organización social propias del modo de producción. Es decir, el contenido es básicamente la acumulación de capital, pero que siempre ya se da según formas históricas, y las formas políticas y fuerzas sociales siempre ya están determinadas por las formas anteriores en que se dio la acumulación del capital.

Recapitulando lo dicho por Cantamutto y Wainer, claro que el resultado de “la salida de la crisis” depende de las formas políticas concretas de las fuerzas sociales, y no está sólo determinado por las condiciones económicas estructurales, pero éstas expresan un contenido del capital que determina a las propias fuerzas sociales. Todo proceso “económico” es a la vez “político”, incluso los más técnicos, pero se trata de *analizar en cada caso en qué medida la acumulación de capital determina los cambios sociales, y en profundizar en las distintas formas de desarrollo de la acumulación de capital*. Es decir, entender el alcance de la necesidad de un ajuste en un momento dado o la potencialidad de crecimiento económico en otro, estudiar las distintas formas políticas que pueden adquirir cada uno, y profundizar en su vínculo.

Para terminar, creemos que la salida de la crisis implicó un cambio en las relaciones de fuerza dentro del mismo bloque de poder, por el cual la gran burguesía industrial local trasnacional pasa a ser la fracción hegemónica que detenta la hegemonía dentro del bloque (como antes era la gran burguesía financiera internacional), aunque sin consolidar un nuevo proyecto hegemónico, en parte por las concesiones a todos los demás sectores (Wainer 2013; Cantamutto y Wainer 2013). Pero *este nuevo equilibrio que económicamente es visible, no significa que existe un modelo de acumulación producto de un proyecto político* de una fracción burguesa, sino apenas una forma de acumulación que sigue siendo altamente dependiente de variables globales inestables y que beneficia principalmente a un sector de la burguesía.

Bibliografía

Artese, Matías (2013) *Cortes de ruta y represión. La justificación ideológica de la violencia política entre 1996 y 2002*, UBA Sociales Publicaciones, Eudeba, Buenos Aires.

Beltrán, Gastón (2014) “El empresariado argentino frente a la crisis. Alianzas, conflictos y alternativas de salida en la etapa final de la convertibilidad” en Pucciarelli, Alfredo y Ana Castellani (coord.) *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*, Siglo XXI, Buenos Aires.

- Bonnet, Alberto (2002) “La crisis de la convertibilidad en la Argentina” en *Memoria Revista Mensual de Política y Cultura*, n° 162, agosto de 2002.
- Cantamutto, Francisco y Andrés Wainer (2013) *Economía política de la convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen*, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Castellani, Ana y Martín Schorr (s/f): “Crisis de acumulación y disputas en el interior de los sectores económicamente dominantes de la Argentina. Una interpretación sobre la crisis del «modelo» de la Convertibilidad”, apunte de cátedra, mimeo. Versión similar en Castellani y Schorr “Argentina: Convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico”, en Cuadernos del CENDES, N° 57, 2004, Caracas.
- Cavarozzi, Marcelo (2006) *Autoritarismo y democracia (1955-2006)*, Ariel, Buenos Aires.
- Cobe, Lorena (2009) *La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación*, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Delamata, Gabriela (2004) *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*, Libros del Rojas, Eudeba, Buenos Aires.
- Eskenazi, Matías (2009) “El espectro de la dolarización. Discutiendo las interpretaciones sobre la disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertibilidad” en Bonnet, Alberto y Adrián Piva *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires.
- Gómez, Marcelo (2007) “Origen y desarrollo de los patrones de acción y organización colectiva desafiante de los movimientos de desocupados en la Argentina” en Villanueva, Ernesto y Astor Massetti (comp.) *Movimientos sociales y acción colectiva en la Argentina hoy*, Prometo Libros, Buenos Aires.
- Graña, Juan (2013) *Salarios, calidad del empleo y distribución. Condiciones estructurales en Argentina*, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Grigera, Juan y Matías Eskenazi (2013) “Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad” en Juan Grigera (comp.) *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.
- Grinberg y Starosta (2014) “From global capital accumulation to varieties of centre-leftism in South America”, en *Crisis and Contradiction: Marxist Perspectives on Latin American in the Global Economy*, Susan Spronk y Jeff Webber (co-ordinadores), Brill Academic Publishers (en prensa).
- Iñigo Carrera, Juan (2011) “De la crisis al apogeo de la representación: subjetividad política y acumulación de capital en Argentina” en Dossier de *Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)*, n°79, diciembre de 2011.
- Pérez Álvarez, Gonzalo (2010) *Cambios en la estructura económica social y conflictos sociales en el noroeste del Chubut 1990-2005*, tesis doctoral, Memoria Académica, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.369/te.369.pdf>
- Schorr, Martín y Andrés Wainer (2005) “Argentina: ¿muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del «modelo de los noventa» al del «dólar alto»” en *Realidad Económica*, n° 211, IADE, Buenos Aires.
- Thwaites Rey, Mabel (2011) “2001-2011: de la crisis a la recomposición estatal” en Dossier de *Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)*, n°79, diciembre de 2011.
- Wainer, Andrés (2013) “Cambios en el bloque en el poder a partir del abandono de la convertibilidad. ¿Una nueva hegemonía?” en *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Imago Mundi, Buenos Aires.

Fuentes

Amadeo, Eduardo (2003) *La salida del abismo. Memoria política de la negociación entre Duhalde y el FMI*, Planeta, Buenos Aires.

Duhalde, Eduardo (2007) *Memorias del incendio. Los primeros 120 días de mi presidencia*, Sudamericana, Buenos Aires.